

LA AYUDA INTERNACIONAL Y LA INVERSIÓN EN HONDURAS

No solo son los fallos del Estado hondureño y de las empresas nacionales lo que alimenta el sufrimiento de los activistas que intentan proteger su tierra y los abusos contra ellos. El dinero canalizado hacia Honduras desde Estados Unidos y otros países, mediante paquetes de ayudas o a través de instituciones financieras internacionales, se usa para financiar proyectos impuestos de forma ilegal, para desarrollar las políticas e infraestructuras que estos proyectos necesitan y para formar y equipar a las instituciones policiales y militares que atacan a los defensores de la tierra y el medio ambiente.

Si bien los donantes internacionales hablan de estimular el crecimiento y la prosperidad, la corrupción y los abusos en torno a estos proyectos están fomentando la destrucción, los desplazamientos y la muerte precisamente de aquellos líderes comunitarios que podrían contribuir a un futuro más sostenible y próspero. El Gobierno de Honduras está promoviendo la inversión extranjera en industrias que están causando niveles sin precedentes de violencia contra los activistas. Invertir en el contexto actual es invertir en las causas de la desigualdad y la inseguridad que empujaron a miles de ciudadanos hondureños a emigrar a Estados Unidos en 2016²¹⁴.

LA COMPLICIDAD DE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el principal donante de ayuda de Honduras y financia a algunas de las IFI más importantes, entre ellas la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales financian presas hidroeléctricas y sus infraestructuras en Honduras²¹⁵. En 2016, Estados Unidos proporcionó 98,3 millones de dólares (USD) en ayuda bilateral a Honduras, además de 750 millones en fondos regionales a América Central para apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad, así como dinero adicional del Departamento de Defensa²¹⁶. Una falta de transparencia suscita dudas sobre a qué se dedica esta ayuda y cuánta se canaliza a través de las IFI. Lo que está claro es que las contribuciones de Estados Unidos al Plan Alianza para la Prosperidad aumentan en gran medida la ayuda para seguridad destinada a Honduras.

La ayuda estadounidense también fomenta el modelo de desarrollo actual al pedir que Honduras establezca



Estados Unidos ha dado millones de dólares al gobierno hondureño a pesar de los abusos de derechos humanos. © zrfphoto/iStock

«políticas de gobernanza que atraigan la inversión extranjera, aumenten la modernización y la privatización y promuevan la adopción de soluciones energéticas regionales»²¹⁷. En teoría, el 50 % de la financiación directa de Estados Unidos al Gobierno de Honduras está condicionada a que el país cumpla sus obligaciones de derechos humanos, lo que incluye permitir que los activistas «operen sin interferencias»²¹⁸. Resulta increíble que, tras un año en el que se ha asesinado a 14 activistas ambientales y de la tierra y se ha amenazado a muchos otros, el Departamento de Estado de Estados Unidos, aun así, haya aprobado el desembolso de fondos en octubre de 2016.

En 2016, el ejército y la policía de Honduras recibieron 18 millones de dólares (USD) en ayuda estadounidense, a pesar de sus abusos contra activistas²¹⁹. Un antiguo miembro de una unidad del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos afirma que los militares tienen una lista negra de activistas de derechos humanos, mientras que dos soldados están siendo procesados actualmente por el asesinato de Berta Cáceres²²⁰. Su organización, el COPINH, ha denunciado la infiltración de un espía militar y la policía que protege la presa de Agua Zarca ha sido acusada de amenazar a miembros de la comunidad local. Como respuesta a los abusos militares y policiales, en el Congreso de Estados Unidos se ha presentado la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, por la que se exige la suspensión de la ayuda para seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad y se lleve a los tribunales a los autores. Si se aprueba, esta ley podría representar todo un hito en el ámbito de las condiciones para recibir ayuda estadounidense que podría forzar a los países a mejorar sus prácticas.

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

En un fulminante informe publicado recientemente por las Naciones Unidas sobre la situación en Honduras se afirmaba que las instituciones financieras internacionales (IFI) comparten la responsabilidad de los abusos de los derechos humanos relacionados con los proyectos en los que invierten²²¹. Las IFI contribuyen financiando proyectos empresariales como presas hidroeléctricas y proyectos agroindustriales, a la vez que presionan a los Estados receptores para que cambien sus marcos normativos²²².

La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial es especialmente activa y se ha visto relacionada con varias inversiones polémicas:

➤ Entre 2007 y 2011, la CFI proporcionó 86,5 millones de dólares (USD) al banco Ficohsa, coincidiendo con la inversión del banco en el hotel Indura, el cual ha provocado enfrentamientos con las comunidades garífunas locales²²³. En octubre de 2015, la OFRANEH, una organización que representa a la comunidad de Barra Vieja, presentó una queja a la CFI por su apoyo financiero al banco Ficohsa²²⁴. En la queja se alega que las inversiones de la CFI han provocado «un acaparamiento de tierras, el desplazamiento de la comunidad, una falta de beneficios económicos y una degradación ambiental»²²⁵.

➤ En 2009, la CFI invirtió 30 millones de dólares (USD) en la Corporación Dinant, un gigante de la agroindustria acusado de estar implicado en los asesinatos de agricultores a pequeña escala que se oponían a las plantaciones de aceite de palma de la región de Bajo Aguán. Dinant niega rotundamente cualquier implicación directa o indirecta en escuadrones de la muerte o violaciones de los derechos humanos. Desde entonces, la CFI ha admitido no haber aplicado sus políticas sociales y ambientales al aprobar el préstamo²²⁶.

➤ Más recientemente, la CFI invirtió 30 millones de dólares (USD) en el proyecto hidroeléctrico La Vegona, que en julio de 2016 provocó las solicitudes de la comunidad de un porcentaje más justo de los beneficios²²⁷.

Estados Unidos es el mayor accionista individual de la CFI, seguido de Japón, Alemania y el Reino Unido²²⁸. La Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), la institución financiera para el desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, también tiene una inversión por valor de 22,5 millones de dólares (USD) en el banco Ficohsa, que respalda dos de los negocios mencionados en este informe que han sido acusados de abusos de los derechos humanos: el Indura

Beach and Golf Resort y el gigante de la agroindustria Dinant²²⁹.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también tiene un gran interés en el desarrollo de Honduras. Casi el 90 % de los préstamos del BID a Honduras están destinados a financiar la energía, el comercio y la «modernización»²³⁰. Entre 2008 y 2015, este banco concedió al menos 562 millones de dólares (USD) al Estado hondureño para una inversión en producción de electricidad y energías renovables, particularmente mediante la ampliación de proyectos hidroeléctricos²³¹. El banco también financia numerosos proyectos agroindustriales²³². Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Canadá son los accionistas más influyentes del BID.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco holandés de desarrollo FMO y el banco finlandés de desarrollo Finnfund son inversores en la polémica presa de Agua Zarca. Como se describe en el estudio de caso 2, numerosos miembros del COPINH, entre ellos su líder, Berta Cáceres, fueron atacados, acosados, criminalizados o asesinados por oponerse a este proyecto. Desde que un empleado actual de la empresa propietaria de Agua Zarca fuera arrestado por el asesinato de Cáceres, el FMO y Finnfund se han comprometido a retirarse del proyecto. Y, sin embargo, habían cerrado los ojos ante las múltiples amenazas públicas que recibió Cáceres durante años. En un informe reciente de las Naciones Unidas se concluyó que los inversores fracasaron repetidamente a la hora de reevaluar su apoyo cuando había activistas que habían sufrido ataques graves²³³.

El acceso a la información sigue siendo un obstáculo para las organizaciones de la sociedad civil que intentan entender el papel de las IFI en los proyectos de desarrollo, ya que en Internet se dispone de muy poca documentación sobre las inversiones.

NEGOCIOS ARRIESGADOS: LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN HONDURAS

Las empresas y los inversores también han fracasado en su responsabilidad de proteger a los activistas y han sufrido los consecuentes riesgos para su propia reputación y para la viabilidad fundamental de sus proyectos. De acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, las empresas tienen la obligación de respetar el derecho internacional en materia de derechos humanos, independientemente de la capacidad o la voluntad del Estado de hacer lo propio²³⁴.

Además, cada vez está más clara la justificación empresarial de actuar para proteger a los activistas²³⁵.

Los conocimientos locales de los defensores son esenciales para ayudar a los inversores a detectar, prevenir y mitigar los abusos de los derechos humanos y, en consecuencia, minimizar también las repercusiones empresariales negativas y evitar los riesgos financieros y los no financieros, como los legales, reputacionales, operativos y normativos²³⁶. Muchas de las características de un entorno seguro y propicio para los defensores están estrechamente relacionadas con un entorno operativo estable para los negocios, en el que las empresas y los defensores prosperan por igual en contextos de transparencia, Estado de derecho, no discriminación y libertad de asociación.

Los mercados y los consumidores suelen recompensar a las empresas que son proactivas en su gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y que tienen una buena reputación en lo que respecta a los derechos y la ética. No obstante, en Honduras las empresas son más propensas a debilitar la seguridad de los defensores, ya sea atacando a los propios activistas o criminalizando y deslegitimando sus actividades.

Si bien muchos de los proyectos están respaldados por capital internacional, la mayoría de las empresas en torno a las cuales se está amenazando a los defensores son hondureñas. Sin embargo, tanto el Gobierno de Honduras como las embajadas extranjeras están preparando el terreno para un aumento de la actividad de las empresas extranjeras en el país. La inversión extranjera directa está al alza²³⁷ y las exportaciones de Honduras a la UE crecieron en un 21 % en 2015²³⁸. Aparte de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Honduras también firmó un Acuerdo de asociación UE-América Central en 2012 para impulsar las relaciones comerciales²³⁹.

Estados Unidos sigue siendo el socio comercial principal de Honduras y, en 2013, el comercio bilateral alcanzó los 9.800 millones de dólares (USD)²⁴⁰. La embajada estadounidense en Honduras está fomentando la inversión de Estados Unidos en las industrias extractivas del país. Una empresa minera estadounidense, Electrum, tiene prevista una inversión de 1.000 millones de dólares (USD) en Honduras, según la embajada²⁴¹, mientras que otra empresa minera estadounidense, Inception, opera la mina de oro de Clavo Rico, en el sur de Honduras, que extrae hasta 1.000 toneladas al día²⁴².

La minería es el núcleo principal de la apertura de Honduras al negocio internacional y el presidente Hernández declaró 2015 «El año de la minería». Para mediados de 2015, Honduras había recibido 333 solicitudes de concesiones de minería, exploración y explotación²⁴³. Esto es especialmente preocupante en el contexto actual, dado que el sector de la minería es el principal causante de los ataques a los defensores de la

tierra y el medio ambiente por todo el mundo²⁴⁴. El 99 % de todas las inversiones mineras extranjeras de Honduras es canadiense²⁴⁵. Debido a los abusos relacionados con la minería (al igual que con la energía hidroeléctrica, la tala, la agroindustria y el turismo), cualquier futuro inversor debería mantenerse alejado de estas industrias hasta que se garantice la seguridad de los activistas, se procese a los autores de los actos violentos y se respeten las leyes.

LO QUE DEBE CAMBIAR EN LA AYUDA Y LA INVERSIÓN

Estados Unidos y otros donantes deberían revisar sus políticas de ayuda a Honduras y garantizar que no están promoviendo ni financiando las industrias que ponen en peligro a los activistas. Deberían garantizar una mayor transparencia en torno a la ayuda y canalizar los fondos de modo que no se destinen a las fuerzas de seguridad sino a reforzar el sistema judicial y empoderar a la sociedad civil. Claramente, Honduras no está cumpliendo las estipulaciones de derechos humanos a las que actualmente está condicionada la ayuda estadounidense y el 50 % de los fondos directos debería, por lo tanto, retenerse hasta que se garantice su cumplimiento. Estados Unidos también debería usar su influencia sobre las IFI para asegurarse de que no son cómplices en la financiación de industrias que provocan ataques contra los defensores²⁴⁶.

Es primordial que las IFI alcen la voz contra los ataques a los defensores y se aseguren de que se crean e implementan políticas sólidas sobre cómo van a garantizar un diálogo constructivo con las comunidades locales. Deberían actuar para prevenir las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente y responder cuando ocurran agresiones. Asimismo, deberían revisar sus inversiones en curso y futuras en Honduras y congelar la financiación si aparecen reclamaciones graves sobre ataques contra los defensores o un incumplimiento de la consulta a las comunidades locales. Es fundamental que las comunidades locales tengan acceso a información completa sobre los proyectos.

Dado el contexto actual de corrupción y abusos de los derechos humanos, no sería responsable que las empresas extranjeras aumentaran sus operaciones en las industrias hondureñas que forman el núcleo de la violencia contra los activistas, concretamente la minería, la energía hidroeléctrica, la tala, la agroindustria y el turismo. Hacerlo plantearía a sus negocios riesgos tanto operativos como reputacionales y fomentaría más ataques contra los activistas. Hay una serie de acciones que las empresas que ya operan en Honduras pueden realizar para contribuir a crear un entorno más seguro para los defensores²⁴⁷.